

Señor.

**JUEZ DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE BUGA EN ORALIDAD.**

Reparto.

**Referencia: Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.**

**BENJAMÍN ACOSTA ORTIZ**, mayor de edad y residente en Santiago de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.513.396 expedida en Trujillo (Valle), Abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 107090 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderado judicial del señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**, persona mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.327.917 expedida en Palmira (Valle), quien será la parte demandante en el presente proceso, ante el señor Juez con todo respeto, me permito presentar Medio de Control de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Art. 138 de la Ley 1437 de 2011), en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, establecimiento público adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, creado por el Decreto 417 de 1995 adicionado por el Decreto 3075 de 1955, reglamentado según decretos 782 de 1996, 2343 de 1971, 2003 de 1984 y 823 de 1995, que será la parte demandada, representada legalmente por el señor Brigadier General retirado **JORGE ALIRIO BARÓN LEGUIZAMÓN**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C, o quien haga sus veces, para que por los trámites de un proceso ordinario, se profiera sentencia sobre las siguientes peticiones:

## CAPÍTULO I. DECLARACIONES Y CONDENAS:

**PRIMERA:** Declarase nulo el acto administrativo materializado en el oficio número **E-00003-201724203-CASUR Id: 276914** de fecha 30 de octubre de 2017, emanado de la Dirección General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de la Asignación de Retiro a que tiene derecho el señor Intendente ® **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**, por haber laborado por más de veinte (20) años al servicio de la Policía Nacional.

**SEGUNDA:** Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho, ordénese a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, reconocer el derecho a la asignación de retiro al señor Intendente retirado **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**.

**TERCERA:** Ordénese a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, que pague al señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**, el valor de las sumas dejadas de percibir por concepto de la asignación de retiro, junto con las primas y demás emolumentos e incrementos legales, desde el día 27 de junio de 2017, fecha en que le fuera notificada la Resolución número 02862 del 21 de junio de 2017, mediante la cual, el señor Director General de la Policía Nacional de Colombia, ejecutó la sanción disciplinaria de destitución, impuesta al Intendente MENA NEIZA dentro de proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría General de la Nación; y hasta cuando le sea reconocida tal asignación como consecuencia de la sentencia que ponga fin al proceso contencioso administrativo.

**CUARTA:** Ordénese también a la parte demandada, que siga pagando de manera vitalicia la asignación de retiro al señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**, hasta que suceda alguna de las causales que extinguen el derecho.

**QUINTA:** A título de sanción moratoria, y como consecuencia de la declaración primera, ordénese a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, reconocer y pagar al señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**, o a quién sus derechos represente al momento del fallo, UN VALOR ADICIONAL equivalente a las sumas dejadas de percibir por concepto de la asignación de retiro.

**SEXTA:** Igualmente como consecuencia de la declaración primera, se condene a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL a reintegrar al señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**, todas las sumas que demuestre haber pagado por concepto de servicios médicos, intervenciones quirúrgicas, hospitalarios, de laboratorio, especialistas, odontológicos, tanto de él como de su familia, asistencia jurídica, desde su retiro hasta cuando se disponga el reconocimiento de la asignación de retiro.

**SEPTIMA:** La liquidación de las condenas, deberá efectuarse mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia, y se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor, conforme a lo dispuesto por el Artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

**OCTAVA:** Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar aplicación a los Artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

## CAPÍTULO II. HECHOS:

**1.-** El señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**, se vinculó a la Policía Nacional en el Cuerpo del Nivel Ejecutivo, desde el 04 de agosto de 1997 cuando ingresara a

la Escuela de Policía Simón Bolívar de la ciudad de Tuluá, haciendo carrera en la Institución hasta alcanzar el grado de intendente.

2.- La vinculación con la Policía Nacional del señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**, se dio desde el 04 de agosto del año 1997, y hasta el día 27 de junio de 2017, fecha en que le fuera notificada la Resolución número 02862 del 21 de junio de 2017, mediante la cual, el señor Director General de la Policía Nacional de Colombia, ejecutó la sanción disciplinaria de destitución, impuesta al Intendente MENA NEIZA dentro de proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría General de la Nación.

3.- La carrera del Nivel Ejecutivo a la que ingresó como alumno el señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA** desde el 04 de agosto de 1997, fue creada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley 041 del 10 de enero de 1994, sustentando su creación en las facultades otorgadas en el artículo 35 de la ley 62 de 1993, norma que avaló al Ejecutivo para modificar las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, pero no para crear una nueva carrera como lo hizo el Gobierno Nacional, circunstancias que dieron lugar a que el referido Decreto fuera declarado inexecutable por la honorable Corte constitucional mediante sentencia C-417 del 22 de septiembre de 1994, con ponencia del doctor CARLOS GAVIRIA DIAZ, argumentando para ello la alta Corporación, que el Ejecutivo excedió las facultades que le fueron otorgadas por el Congreso de la república mediante la Ley 62 de 1993, pues tal facultad se circunscribía a modificar las normas de carrera del personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, sin embargo, el Gobierno Nacional sin tener competencia para ello, creó una nueva carrera (NIVEL EJECUTIVO), excediendo así su potestad. Fue esto lo que entre otras cosas se dijo en la aludida sentencia:

*“El Presidente de la República, al tenor de la ley de investidura, no estaba autorizado para crear una tercera categoría dentro del personal uniformado de la Policía Nacional, denominada "nivel ejecutivo", tal como se hizo, pues el legislador ordinario decidió conservar las mismas tres categorías que tradicionalmente se conocen en esa Institución, a saber: la de oficiales, la de suboficiales y la de agentes. El Ejecutivo se extralimitó al desarrollar las atribuciones otorgadas en el numeral 1o. del artículo 35 de la ley 62 de 1993, pues olvidó que es obligación del Gobierno, cuando actúa como legislador extraordinario, ceñirse en su integridad a los precisos parámetros o directrices fijados por el Congreso en la ley de habilitación legislativa, ya que su inobservancia configura invariablemente la inexecutable de las normas expedidas, por contrariar la Constitución.*

(...)

*Es preciso reiterar que esta Corporación no puede aceptar que la voluntad del legislador ordinario, que en este caso quedó consagrada expresamente*

*en la ley de facultades, se modifique o desconozca, pues si el Constituyente exige que las facultades sean precisas, es para evitar desbordamientos por parte del Presidente de la República al desarrollarlas”.*

**4.-** Al declararse la inexequibilidad del Decreto 041 de 1994, para el personal vinculado en la nueva carrera (nivel Ejecutivo), se generó un vacío jurídico, razón por la que por principio de favorabilidad, recobró vigencia la norma anterior al Decreto Ley 041 del 10 de enero de 1994, que regía lo referente a estatutos de carrera y régimen de asignación de retiro de los Suboficiales, es decir, el Decreto 1212 de 1990, que en su artículo 144 dispone:

*Art. 144.- ASIGNACIÓN DE RETIRO. Durante la vigencia del presente Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, **o por mala conducta**, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean retirados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el Artículo 140 de éste Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.*

**5.-** Ante el vacío jurídico generado con la declaratoria de inexequibilidad del Decreto Ley 041 del 10 de enero de 1994, y para darle un piso jurídico a la carrera del Nivel Ejecutivo, mediante la Ley 180 del 13 de enero de 1.995, el Congreso de la República otorgó facultades al señor Presidente de la República para desarrollar la carrera policial del Nivel Ejecutivo, con la prevención específica de que no podía desmejorar indiscriminadamente en ningún aspecto, al personal que estando en servicio activo de la Policía Nacional, ingresara a la nueva carrera (Nivel Ejecutivo), prevención que quedara plasmada en el artículo 7º, Numeral 5º, Parágrafo, de la Ley aludida, de la siguiente manera:

*Parágrafo. La creación del Nivel Ejecutivo **no podrá discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto**, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al Nivel Ejecutivo.*

**6.-** Atendiendo las facultades otorgadas en la Ley 180 del 13 de enero de 1.995, el Ejecutivo expidió el Decreto Ley número 132 de enero 13 de 1.995, por medio

del cual se desarrolló la carrera del Nivel Ejecutivo, norma que en su Artículo 82, reiteró la protección para aquellos policiales que a la entrada en vigencia de la norma ya se encontraban vinculados con la Policía Nacional, introduciendo la prohibición de desmejorar a dichos Servidores Públicos desde cualquier punto de vista, prohibición que quedara plasmada de la siguiente manera:

*Art. 82. Ingreso al Nivel Ejecutivo. **El ingreso al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional no podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional.***

7.- Como quiera que el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley número 132 del 13 de enero de 1.995, desarrolló la carrera del Nivel Ejecutivo pero no reguló lo referente a prestaciones sociales y asignación de retiro y pensión, con base en las atribuciones otorgadas por la Ley 4 de 1992, el Presidente de la República expidió el Decreto 1091 de 1995, mediante el cual se reglamentó el régimen de asignación de retiro y pensión para los miembros del Nivel Ejecutivo, disponiendo en el artículo 51 lo siguiente:

*ARTICULO 51. ASIGNACION DE RETIRO PARA EL PERSONAL DEL NIVEL EJECUTIVO. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se le pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo 49 de este decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas, en las siguientes condiciones:*

*a. Al cumplir veinte (20) años de servicio y ser retirado por cualquiera de las siguientes causas:*

- 1. Llamamiento a calificar servicio.*
- 2. Voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional.*
- 3. Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad policial.*
- 4. Por haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad los hombres y sesenta (60) años de edad las mujeres.*

*b. Al cumplir veinticinco (25) años de servicio y ser retirado o separado por cualquiera de las siguientes causas:*

- 1. Por solicitud propia.*
- 2. Por incapacidad profesional.*
- 3. Por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada.*
- 4. Por conducta deficiente.*
- 5. Por destitución.*
- 6. Por detención preventiva que exceda de ciento ochenta (180) días.*

*7. Por separación absoluta en las condiciones establecidas en el artículo 68 del Decreto 132 de 1995.*

*Parágrafo También tendrá derecho al pago de asignación mensual de retiro el personal del nivel ejecutivo de que trata el literal b. de este artículo, cuando cumpla los siguientes requisitos:*

*1. Veinte (20) años de servicio a la Policía Nacional, y*

*2. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad los hombres y cincuenta (50) años de edad las mujeres.*

**8.-** La Norma que facultó al Gobierno Nacional para la creación del régimen prestacional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, es decir, la Ley 4ª de 1992, dispuso en su artículo 2º que para la fijación de tal régimen no se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales al personal ya vinculado, sin embargo el Ejecutivo desconoció este mandato, pues en el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 aumentó el tiempo de servicio para adquirir el derecho a la asignación de retiro, motivo por el que el referido artículo fue declarado nulo por el honorable Consejo de Estado, mediante sentencia del 14 de febrero de 2007, proferida en el expediente 1240-2007.

**9.-** Como quiera que el señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA** se vinculó con la Policía Nacional en la carrera del Nivel Ejecutivo desde el 04 de agosto de 1997, Al declararse la nulidad del Decreto 1091 de 1995, por derecho de igualdad, por principio de favorabilidad en materia laboral y por principio de analogía, la norma a aplicar en su caso era la Norma que regulaba tal derecho para los Suboficiales, antes de la creación del Nivel Ejecutivo, es decir, el Decreto 1212 de 1990, artículo 144, transcrito en el hecho número 4 de la presente demanda.

**10.-** Nuevamente, para subsanar el vacío jurídico generado por la declaratoria de nulidad del Decreto 1091 de 1995, el Congreso de la República a través de la Ley Marco 923 del 30 de diciembre de 2004, otorgó facultades al Gobierno Nacional para la creación de un nuevo Régimen Pensional y de Asignación de Retiro para los miembros de la fuerza pública, disponiendo en el artículo 2º, Numeral 2.8 de la referida Ley, que por parte del Gobierno Nacional, no podría desconocerse el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al miembro de la Fuerza Pública que hubiere adquirido el derecho a su disfrute por llamamiento a calificar servicios, por retiro por solicitud propia, **o por haber sido retirado del servicio por cualquier causal; y** también en el artículo 2º, Numeral 2.1, de la norma ibidem, se dispuso lo siguiente:

*ARTÍCULO 2o. OBJETIVOS Y CRITERIOS. Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos y criterios:*

**2.1. El respeto de los derechos adquiridos. Se conservarán y respetarán todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones anteriores a la fecha de entrada de las normas que se expidan en desarrollo de la misma.**

11.- A pesar del marco Fijado por el Legislador, el Gobierno Nacional dio nacimiento al nuevo Régimen Pensional y de Asignación de Retiro para los miembros de la fuerza pública a través del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, pero con dicha normatividad desconoció los objetivos y criterios que según el Legislativo debían observarse para la fijación de dicho régimen, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política, siendo así que se desmejoró de manera grave al personal de Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes que ya se encontraban vinculados con la Institución, pues no se creó un régimen de transición para aquellos uniformados que se encontraban vinculados antes del 31 de diciembre de 2004 y que estaban ad portas de adquirir su derecho a la asignación de retiro, y se aumentó el tiempo de servicio para adquirir el derecho a la referida asignación, pues al respecto se dispuso lo siguiente en el Artículo 25 Parágrafo 2º:

*“Parágrafo 2º. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, sea retirado con veinte (20) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Ministro de Defensa Nacional o del Director General de la Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo 23 de este decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas”.*

12.- Precisamente, por no ajustarse a los lineamientos de la Ley 923 de 2004, el Artículo 25 Parágrafo 2º del Decreto 4433 de 2004, fue declarado nulo por el honorable Consejo de Estado mediante la sentencia de fecha 12 de abril de 2012 emitida dentro del expediente de simple nulidad Número 0290-06 (1074-07), con ponencia del doctor ALFONSO VARGAS RINCÓN, donde entre otras cosas se expuso:

*“De lo anterior se concluye la imposibilidad para el gobierno de introducir disposiciones que desvirtúen la voluntad del legislador, pues los límites de*

esta facultad los señala la necesidad de cumplir adecuadamente la norma que desarrolla.

En el caso objeto de estudio, observa la Sala que el Gobierno Nacional se encontraba facultado por la Ley 923 de 2004 para reglamentar lo relacionado con el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. En virtud de esa facultad expidió el Decreto 4433 de 2004.

El cargo que la parte actora hace en relación con la disposición acusada, parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, se circunscribe al hecho de que no respeta los derechos de los agentes y suboficiales que se incorporaron al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, concretamente porque aumentó el tiempo en que podían acceder a una asignación de retiro, así:

- De 20 a 25 años si el retiro era por solicitud propia
- De 15 a 20 años si el retiro se presentaba por otra causal.

Como la nulidad que se alega tiene fundamento en que se aumentó el tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro a pesar de que la Ley 923 de 2004 estableció un límite mínimo y máximo y la prohibición de que a quienes se encontraran en servicio activo se les exigiera un tiempo de servicio superior al que regía al 30 de diciembre de 2004 cuando la causal del mismo era la solicitud propia, ni inferior a 15 años por otra causal, es necesario determinar cuál era el régimen vigente para dicha época con el fin de establecer si el Gobierno al ejercer la potestad reglamentaria, varió las condiciones señaladas en la Ley marco.

Al haber sido declarado inexecutable el Decreto Ley 2070 de 2003 y nulo el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, que regulaba lo atinente al régimen pensional del nivel ejecutivo, quedaron vigentes tratándose de suboficiales el Decreto 1212 de 1990 y de Agentes el Decreto 1213 de 1990.

Se aclara que el estudio se centrará sólo en el régimen de asignación de retiro vigente cuando entró a regir la Ley 923 de 2004, para los grados de Suboficial y agente, teniendo en cuenta que de conformidad con la Ley 180 de 1995 que creó el Nivel ejecutivo, a él únicamente podían acceder quienes tuvieran dicha calidad y aunque también estableció que personal no uniformado y otros por incorporación directa podían hacerlo, lo cierto es que la demanda se refiere a la desmejora en materia de asignación de retiro del personal de suboficiales y agentes.

Aclarado lo anterior, se tiene que el Decreto 1212 de 1990, en el artículo 144, en relación con los suboficiales contemplaba la posibilidad de retiro a los 15 años de servicio en los siguientes eventos:



*...por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente...*

*Igualmente contempló el derecho para quienes se retiraran (voluntad propia) o fueran separados, a los 20 años, de acceder a una asignación de retiro.*

*En los dos casos (15 o 20 años), dispuso lo siguiente:*

*..tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.*

*En lo que tiene que ver con los agentes de la Policía Nacional, el Decreto 1213 de 1990, artículo 104, contempló la posibilidad de acceder a una asignación de retiro después de 15 años, al retiro por las siguientes causales:*

*“...por disposición de la Dirección General, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente a su categoría, o por mala conducta comprobada, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por inasistencia al servicio y los que se retiren a solicitud propia después de los veinte (20) años de servicio.*

*Y con 20 años, por solicitud propia, evento en el cual se contempló una asignación de retiro en las siguientes condiciones:*

*...se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 100 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda de los quince (15) sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.*

*Por su parte el Parágrafo acusado del artículo 25, dispuso:*

*Asignación de retiro con 20 años por llamamiento a calificar servicios por voluntad del Ministro de Defensa Nacional o del Director General de la Policía Nacional y por disminución de la capacidad psicofísica.*

*Asignación de retiro a los 25 años por solicitud propia y retiro absoluto del servicio.*

*En las anteriores condiciones, se observa que la disposición acusada, es contraria a las previsiones del inciso segundo del numeral 3.1. del artículo 3º de la Ley 923 de 2004, según el cual:*

*...A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.*

*E igualmente desconoció la obligación contenida en el mismo artículo 3º numeral 3.9, según el cual debía establecer un régimen de transición que reconociera las expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a acceder al derecho de pensión o asignación de retiro y al no establecerlo desconoció igualmente la disposición que se acaba de transcribir.*

*Sobre éste punto, se acoge lo expresado en sentencia de esta sección, proferida el 14 de febrero de 2007, expediente No. 1240 de 2004, que en lo que tiene que ver con el régimen de transición, expresó:*

*“Al regularse nuevas disposiciones en materia prestacional, sin entrar a diferenciar entre quienes ingresaron al nivel ejecutivo desde el momento de su creación respecto de los que se vincularon con posterioridad y de quienes permanecieron como suboficiales o agentes en la institución policial, esto es, sin consagrarse un régimen de transición, se estarían desconociendo, así mismo, unos postulados constitucionales (Artículos. 13, 48 y 53) y legales (Artículo 7º parágrafo de la Ley 180 de 1995), que amparan y protegen de manera especiales los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, los que, de no tenerse en cuenta, violarían el principio de la buena fe y de la confianza legítima.*

*En consecuencia, la norma acusada, parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, excedió lo dispuesto por la Ley marco e invadió competencias legislativas, pues modificó lo referente al tiempo mínimo para obtener la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo que a la fecha de entrada en vigencia de la norma se encontraban en servicio activo al no establecer un régimen de transición que respetara sus expectativas legítimas.*

*En efecto, estableció como tiempo mínimo para obtener la asignación de retiro por solicitud propia en 25 años, tiempo que excede al contemplado en el régimen anterior para suboficiales en 5 años.*

*Y tratándose de causales diferentes al retiro por solicitud propia, lo estableció en 20 y 25 años, cuando las normas anteriores habían establecido entre 15 y 20 años, tiempo de servicio que debía respetarse para quienes, de conformidad con lo ordenado en la Ley 923 de 2004, se encontraban en servicio activo al momento de la entrada en vigencia de la Ley, como esta mínima lo dispuso.*

*Es cierto que la Ley marco establece en su artículo 3º, numeral 3.1 un tiempo mínimo de servicio de 18 años y un límite máximo de 25 años para obtener dicha asignación, sin embargo, en el presente asunto no se trata de establecer si el requisito de tiempo de servicio para la generalidad de los beneficiarios se estableció dentro de ese límite mínimo y máximo, sino de la garantía que la Ley 923 de 2004 estableció a favor del personal en servicio activo vinculado a la Policía Nacional y concretamente del personal perteneciente al nivel ejecutivo, que es la inconformidad planteada en la demanda.*

*En consecuencia, se declarará la nulidad del Parágrafo acusado, en consideración a que desconoce las previsiones contenidas en la Ley 923 de 2004, que debió servirle de marco, careciendo en consecuencia de efecto, como lo señala el artículo 5º ibídem.*

*Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,*

**FALLA:**

**ESTÉSE** a lo resuelto en la sentencia 14 de febrero de 2007, proferida en el expediente 1240-2007, por medio de la cual declaró la nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995.

**DECLÁRESE** la nulidad del Parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 del 2004, expedido por el Gobierno Nacional, por medio del cual fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros del personal del nivel ejecutivo de la policía Nacional, en desarrollo de lo dispuesto por la Ley 923 de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

(...)"

**13.-** Para la fecha en que se Decretó la nulidad del Artículo 25 Parágrafo 2º del Decreto 4433 de 2004, es decir, para el 12 de abril de 2012, el señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**, ya contaba con **CATORCE (14) AÑOS, ONCE (11) MESES y OCHO (8) DIAS** al servicio de la Policía Nacional, es decir, se encontraba ad portas de acceder a su asignación de retiro.

**14.-** Al declararse la nulidad del Decreto Ley 4433 de 2004, los miembros del Nivel Ejecutivo vinculados antes del 31 de diciembre de 2004, quedaron nuevamente sin norma que rigiera los referente a la asignación de retiro, razón por la cual, por principio de favorabilidad en materia laboral y por principio de analogía, la norma a aplicar en materia de reconocimiento de asignación de retiro, en su caso, era la Norma que regulaba tal derecho para los Suboficiales, antes de la creación del Nivel Ejecutivo, es decir, el Decreto 1212 de 1990, en su artículo 144.

**15.-** Para llenar el vacío generado por la declaratoria de nulidad del Decreto 4433 de 2004, el Gobierno Nacional, amparado en las facultades otorgadas en la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004, creó un nuevo Decreto Ley para regular lo referente a la asignación de retiro de los Integrantes del Nivel Ejecutivo, siendo este el Decreto Ley 1858 del 06 de septiembre de 2012, pero de manera inexplicable incurrió nuevamente en los mismos vicios de nulidad que dieron lugar a la nulidad de la norma anterior, es decir, el Decreto Ley 4433 de 2004, pues no se tuvo en cuenta que existían policiales vinculados al Nivel Ejecutivo por incorporación directa desde hacía varios años (antes del 31 de diciembre de 2004), y que estos institucionales, como en el caso del señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA** ya contaban con más de quince años al servicio de la Policía Nacional, omitiendo crear un régimen de transición que les amparara, y desconociendo los derechos de aquellos uniformados que se encontraban vinculados con la institución antes de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004.

**16.-** En el artículo 2 del Decreto Ley 1858 del 06 de septiembre de 2012, se reguló lo referente a la asignación de retiro de los miembros del Nivel Ejecutivo vinculados por incorporación directa ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, y al respecto se consignó lo siguiente:

**ARTÍCULO 2.** *Régimen común para el personal del Nivel Ejecutivo que ingresó al escalafón por incorporación directa. Fijase el régimen pensional y de asignación de retiro para el personal que ingresó al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la Institución con veinte (20) años o más de Servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director General de la Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, por la Caja de Sueldos*

*de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo 3 del presente decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el cien por ciento (100%) de tales partidas.*

**17.-** El Decreto 1858 del 06 de septiembre de 2012, fue demandado en acción de nulidad simple por varios ciudadanos, y aunque a la fecha no se ha dictado una sentencia al respecto, es evidente que contiene los mismos yerros por lo que han sido nulitados los actos administrativos anteriores que regularon lo referente al tiempo para acceder a la asignación de retiro por parte de los policiales vinculados al Nivel Ejecutivo, pues no se creó un régimen de transición para aquellos que como el señor JOSÉ HORACIO MENA NEIZA, ya contaban con más de quince años al servicio de la Policía Nacional.

**18.-** Como quiera que el señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA** estuvo vinculado con la Policía Nacional desde el día 04 de agosto de 1997, y hasta el día 27 de junio de 2017, contando con más de veintiún años al servicio de la institución policial, mediante derecho de petición y a través de apoderado solicitó ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional el reconocimiento y pago de una asignación de retiro, en los términos del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.

**19.-** Mediante acto administrativo materializado en el oficio número **E-00003-201724203-CASUR Id: 276914** de fecha 30 de octubre de 2017, la Dirección General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, atendió el derecho de petición presentado por el señor JOSÉ HORACIO MENA NEIZA, negando el reconocimiento y pago de la Asignación de Retiro, argumentando para ello lo siguiente:

*“En atención al escrito del asunto, relacionado con el reconocimiento de asignación mensual de retiro a que cree tener derecho el señor IT (r ) MENA NEIZA JOSE HORACIO, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No 94.327.917, le informo que según la hoja de servicios No. 94.327.917, expedida por la Policía Nacional el 14/07/2017, libro 03, folio 95, certifica que prestó servicios en la Policía Nacional, por espacio de 21 años, 02 meses, 04 días, siendo desvinculado de la Institución por “Destitución”, a partir del 27/06/2017.*

*De conformidad con el Decreto 4433 de 2004, en concordancia con el Decreto 1858 del 06/09/2012, normas de carácter especial que regulan la carrera del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, entre otros pronunciamientos establecen, que el personal del Nivel Ejecutivo que ingresó al escalafón por incorporación directa, que se retiren a solicitud propia o sean retirados, **separados en forma absoluta o destituidos** deben acreditar veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a que*

*por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague asignación mensual de retiro, condición que no cumple para efectos del reconocimiento de asignación mensual de retiro. (Negrilla y Subrayado nuestro)”*.

*En éste orden de ideas, es pertinente indicar que el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, Decreto 4433 del 2004 Artículo 25 parágrafo 02 es una norma que se encuentra revestida por la presunción de legalidad, propia de todos los actos administrativos de esta naturaleza, el cual seguirá vigente y aplicable mientras no sea anulado por autoridad judicial competente, tal como lo dispone el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011.*

*Por último, me permito manifestarle que a la fecha el Gobierno Nacional no ha expedido norma alguna que modifique los requisitos y procedimientos para el reconocimiento de la citada prestación al personal de **Incorporación Directa al Nivel Ejecutivo**.*

*Por tratarse de una información contra éste oficio no procede recurso alguno.*

**20.-** Es cierto que el señor Intendente **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA** fue retirado del servicio por destitución, pero el Decreto 1212 de 1990, norma a él aplicable, contempla como derechos de la asignación de retiro hasta aquellos uniformados retirados del servicio por mala conducta, exigiendo como único requisito el que dicho retiro se produzca después de los quince años de servicio, lapso que ya había superado con creces el señor MENA, pues como se dijo en esta demanda y se ratifica con el acto administrativo acusado, al momento del retiro contaba con Veintiún (21) años, Dos (02) meses y Cuatro (04) días al servicio de la Policía Nacional.

**21.-** Se hace referencia en el acto administrativo cuya nulidad se solicita, que para efectos de negar la Asignación de Retiro al señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**, se tuvo en cuenta también por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional el Decreto 1858 del 06 de septiembre de 2012, pero tal Decreto al igual que el 4433 de 2004 y como se expusiera en el hecho número 11 del presente libelo, fue expedido por el Gobierno Nacional, con base en las facultades otorgadas en la Ley 923 de 2.004, olvidando la entidad, que al momento de expedición de la referida Ley, el señor MENA NEIZA ya se encontraba vinculado con la Policía Nacional, y por lo tanto sus derechos adquiridos y beneficios no podían ser desmejorados, y en su caso, por principio de favorabilidad en materia laboral y por principio de analogía en bonam parte la norma a aplicar en materia de reconocimiento del derecho solicitado por el ciudadano, era el Decreto 1212 de 1990 y no la normatividad aplicada por la entidad.

**22.-** Con el acto administrativo cuya nulidad se solicita, y mediante el cual se le negó al señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**, el derecho a la asignación de retiro

por parte de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se desconoció de manera grave la norma superior y el precedente jurisprudencial del honorable Consejo de Estado y de la honorable Corte Constitucional, y como consecuencia de tal yerro, se le causó al ciudadano un perjuicio grave que debe ser indemnizado, puesto que se le privó de un mínimo vital y móvil, así como del acceso a la seguridad social para él y su familia.

**23.-** El ordenamiento jurídico nacional, concretamente, nuestra Constitución Política dispone, que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución Política y la ley u otra norma jurídica, se debe aplicar las disposiciones constitucionales, principio denominado de excepción de inconstitucionalidad, y que según la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional, es de plena aplicación también cuando existe contraposición entre la Ley y una norma de menor jerarquía (excepción de ilegalidad), como un Decreto o una Resolución, mandato que nos permite argumentar, que en el caso particular y concreto se debe inaplicar el artículo 2 del Decreto Ley 1858 del 06 de septiembre de 2012, por encontrarse en contradicción con la Ley Marco (Ley 923 de 2004). A continuación se transcribe el artículo 4 de la Constitución Política.

*ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.*

**24.-** Al incurrirse en irregularidades constitutivas de violación del ordenamiento superior, le asiste la obligación a la Administración de subsanar su yerro revocando el acto administrativo objeto de reproche y restableciendo al señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA** en el derecho que le fue conculcado.

### CAPÍTULO III. DERECHO:

El acto administrativo materializado en el oficio número **E-00003-201724203-CASUR Id: 276914** de fecha 30 de octubre de 2017, emanado de la Dirección General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de la Asignación de Retiro a que tiene derecho el señor Intendente ® **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**, por haber laborado por más de veintiún (21) años al servicio de la Policía Nacional, se encuentra viciado de nulidad, por VIOLACIÓN DE LA NORMA SUPERIOR, POR VIOLACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL Y POR VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO.

#### **CAPÍTULO IV.** **NORMAS VIOLADAS:**

Con la manifestación de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional al expedir el acto administrativo acusado, se desconoció las siguientes Normas:

Constitución Nacional en sus Artículos 2, 4, 5, 13, 25, 48, 53 Inciso 2º, 58, 150-19 y 19E, 218, 230 Y 241.

Ley 4ª de 1992, en su artículo 2º.

Ley 180 del 13 de enero de 1.995, en el artículo 7º, Numeral 5º, Parágrafo.

Decreto Ley número 132 de enero 13 de 1.995, en su Artículo 82.

Ley 923 de 2.004 en su Artículo 2º Numeral 2.1 y 2.8; Artículo 3º, Números 3.1 y 3.9; así como el Artículo 5º de la Norma Ibídem.

Decreto Ley 1212 de 1990, en su Artículo 144.

Sentencia de fecha 14 de febrero de 2007, emitida por el honorable Consejo de Estado, con ponencia del doctor ALBERTO ARANGO MANTILLA, emitida dentro del radicado 11001-03-25-000-2004-00109-01(1240-04).

#### **CAPÍTULO V.** **CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN:**

Como se dijera en los hechos de la demanda, desde su nacimiento el Nivel Ejecutivo ha carecido de estabilidad jurídica, y tal inestabilidad ha estado motivada en el desconocimiento y extralimitación en que ha incurrido el Gobierno Nacional tanto de la Ley Marco que le facultó para la creación de la nueva carrera, como de la Ley marco que le facultó para reglamentar el régimen de asignación de retiro y pensión, carrera que como se dijo antes, desde su génesis ha sido un mar de falencias.

La carrera del Nivel Ejecutivo fue creada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley 041 del 10 de enero de 1994, motivando su decisión en las facultades otorgadas en el artículo 35 de la ley 62 de 1993, olvidando el Ejecutivo que el referido artículo lo facultaba para modificar las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, pero no para crear una nueva carrera como lo hizo, circunstancias que dieron lugar a que el Decreto Ley 041 fuera declarado inexecutable por la honorable Corte constitucional mediante sentencia C-417 del 22 de septiembre de 1994, con ponencia del doctor CARLOS



GAVIRIA DIAZ, donde se dijo por parte de la alta Corporación, que el Ejecutivo excedió las facultades que le fueron otorgadas por el Congreso de la república mediante la Ley 62 de 1993, pues tal facultad se circunscribía a modificar las normas de carrera del personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, sin embargo, el Gobierno Nacional sin tener competencia para ello, creo una nueva carrera (NIVEL EJECUTIVO), excediendo así su potestad. Fue esto lo que entre otras cosas se dijo en la aludida sentencia:

*“El Presidente de la República, al tenor de la ley de investidura, no estaba autorizado para crear una tercera categoría dentro del personal uniformado de la Policía Nacional, denominada "nivel ejecutivo", tal como se hizo, pues el legislador ordinario decidió conservar las mismas tres categorías que tradicionalmente se conocen en esa Institución, a saber: la de oficiales, la de suboficiales y la de agentes. El Ejecutivo se extralimitó al desarrollar las atribuciones otorgadas en el numeral 1o. del artículo 35 de la ley 62 de 1993, pues olvidó que es obligación del Gobierno, cuando actúa como legislador extraordinario, ceñirse en su integridad a los precisos parámetros o directrices fijados por el Congreso en la ley de habilitación legislativa, ya que su inobservancia configura invariablemente la inexequibilidad de las normas expedidas, por contrariar la Constitución.  
(...)*

*Es preciso reiterar que esta Corporación no puede aceptar que la voluntad del legislador ordinario, que en este caso quedó consagrada expresamente en la ley de facultades, se modifique o desconozca, pues si el Constituyente exige que las facultades sean precisas, es para evitar desbordamientos por parte del Presidente de la República al desarrollarlas”.*

Al declararse la inexequibilidad del Decreto Ley 041 de 1994, aquellos policiales que ya se encontraban vinculados con la Policía Nacional en la nueva carrera, quedaron en un limbo jurídico, lo que obligaba a que por principio de favorabilidad en materia laboral y por derecho de igualdad, lo referente a estatutos de carrera y régimen de asignación de retiro debía regirse por el la norma anterior que regulaba estos aspectos para los Suboficiales de la Policía Nacional, es decir, el Decreto 1212 de 1990.

Para darle un piso jurídico a la carrera del Nivel Ejecutivo, mediante la Ley 180 del 13 de enero de 1.995, el Congreso de la República otorgó facultades al señor Presidente de la República para desarrollar la carrera policial del Nivel Ejecutivo, con la prevención específica de que no podía desmejorar indiscriminadamente en ningún aspecto, al personal que estando en servicio activo de la Policía Nacional, ingresara a la nueva carrera (Nivel Ejecutivo), prevención que quedara plasmada en el artículo 7º, Numeral 5º, Parágrafo, de la siguiente manera:

*Parágrafo. La creación del Nivel Ejecutivo **no podrá discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto**, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al Nivel Ejecutivo.*

Atendiendo las facultades otorgadas en la Ley 180 del 13 de enero de 1.995, el Ejecutivo expidió el Decreto Ley número 132 de enero 13 de 1.995, por medio del cual se desarrolló la carrera del Nivel Ejecutivo, norma que en su Artículo 82, reiteró la protección para aquellos policiales que ya se encontraban vinculados con la Institución, introduciendo la prohibición de desmejorar a dichos Servidores Públicos desde cualquier punto de vista, prohibición que quedara plasmada de la siguiente manera:

*Art. 82. Ingreso al Nivel Ejecutivo. **El ingreso al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional no podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional.***

Como quiera que el Nivel Ejecutivo carecía de una norma que regulara lo referente a prestaciones sociales y asignación de retiro y pensión, con base en las atribuciones otorgadas por la Ley 4 de 1992, el Presidente de la República expidió el Decreto 1091 del 27 de junio de 1995, mediante el cual se reglamentó el régimen de asignación de retiro y pensión para los miembros del Nivel Ejecutivo, disponiendo en el artículo 51 lo siguiente:

*ARTICULO 51. ASIGNACION DE RETIRO PARA EL PERSONAL DEL NIVEL EJECUTIVO. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se le pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo 49 de este decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas, en las siguientes condiciones:*

*a. Al cumplir veinte (20) años de servicio y ser retirado por cualquiera de las siguientes causas:*

- 1. Llamamiento a calificar servicio.*
- 2. Voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional.*
- 3. Por disminución de la capacidad sicofísica para la actividad policial.*
- 4. Por haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad los hombres y sesenta (60) años de edad las mujeres.*

*b. Al cumplir veinticinco (25) años de servicio y ser retirado o separado por cualquiera de las siguientes causas:*

- 1. Por solicitud propia.*
- 2. Por incapacidad profesional.*

3. Por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada.

4. Por conducta deficiente.

5. Por destitución.

6. Por detención preventiva que exceda de ciento ochenta (180) días.

7. Por separación absoluta en las condiciones establecidas en el artículo 68 del Decreto 132 de 1995.

*Parágrafo También tendrá derecho al pago de asignación mensual de retiro el personal del nivel ejecutivo de que trata el literal b. de este artículo, cuando cumpla los siguientes requisitos:*

1. Veinte (20) años de servicio a la Policía Nacional, y

2. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad los hombres y cincuenta (50) años de edad las mujeres.

La Norma que facultó al Gobierno Nacional para la creación del régimen prestacional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, es decir, la Ley 4ª de 1992, dispuso en su artículo 2º, que para la fijación de tal régimen no se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales al personal ya vinculado, sin embargo el Ejecutivo desconoció este mandato, pues en el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 aumentó el tiempo de servicio para adquirir el derecho a la asignación de retiro, motivo por el que el referido artículo fue declarado nulo por el honorable Consejo de Estado, mediante sentencia del 14 de febrero de 2007, proferida en el expediente 1240-2007.

Al declararse la nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, por derecho de igualdad, por principio de favorabilidad en materia laboral y por principio de analogía, la norma a aplicar en materia de reconocimiento de asignación de retiro para el personal vinculado con la nueva carrera, caso que ya era el del señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**, seguía siendo la Norma que regulaba tal derecho para los Suboficiales, antes de la creación del Nivel Ejecutivo, es decir, el Decreto 1212 de 1990, que en su artículo 144 dispone:

*Art. 144.- ASIGNACIÓN DE RETIRO. Durante la vigencia del presente Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean retirados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el Artículo 140 de éste Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por*

*ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.*

Como se dijo antes, desde la creación del Nivel Ejecutivo, todos los Decretos que se han expedido por el Gobierno Nacional para regular lo referente a la Asignación de Retiro de los integrantes del Nivel Ejecutivo, han sido declarados nulos por el honorable Consejo de Estado, por la extralimitación del Ejecutivo al desconocer la Ley marco, sin embargo los actos administrativos nulitados **SON REDIMIDOS CON LOS MISMOS VICIOS**, el Decreto 4433 de 2004, por ejemplo, aplicado por la Caja de Sueldos de Retiro para negar la asignación de retiro al **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**, con respecto al tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro, en su artículo 25, Parágrafo Segundo, dijo:

*Parágrafo 2°. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, sea retirado con veinte (20) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Ministro de Defensa Nacional o del Director General de la Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo 23 de este decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas.*

El Artículo 25 Parágrafo 2° del Decreto 4433 de 2004, también fue declarado nulo por el honorable Consejo de Estado mediante la sentencia de fecha 12 de abril de 2012 emitida dentro del expediente de simple nulidad Número 0290-06 (1074-07), con ponencia del doctor ALFONSO VARGAS RINCÓN, donde entre otras cosas se expuso:

*“De lo anterior se concluye la imposibilidad para el gobierno de introducir disposiciones que desvirtúen la voluntad del legislador, pues los límites de esta facultad los señala la necesidad de cumplir adecuadamente la norma que desarrolla.*

*En el caso objeto de estudio, observa la Sala que el Gobierno Nacional se encontraba facultado por la Ley 923 de 2004 para reglamentar lo relacionado con el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. En virtud de esa facultad expidió el Decreto 4433 de 2004.*

*El cargo que la parte actora hace en relación con la disposición acusada, parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, se circunscribe al hecho de que no respeta los derechos de los agentes y suboficiales que se incorporaron al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, concretamente porque aumentó el tiempo en que podían acceder a una asignación de retiro, así:*

- De 20 a 25 años si el retiro era por solicitud propia
- De 15 a 20 años si el retiro se presentaba por otra causal.

*Como la nulidad que se alega tiene fundamento en que se aumentó el tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro a pesar de que la Ley 923 de 2004 estableció un límite mínimo y máximo y la prohibición de que a quienes se encontraran en servicio activo se les exigiera un tiempo de servicio superior al que regía al 30 de diciembre de 2004 cuando la causal del mismo era la solicitud propia, ni inferior a 15 años por otra causal, es necesario determinar cuál era el régimen vigente para dicha época con el fin de establecer si el Gobierno al ejercer la potestad reglamentaria, varió las condiciones señaladas en la Ley marco.*

**Al haber sido declarado inexecutable el Decreto Ley 2070 de 2003 y nulo el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, que regulaba lo atinente al régimen pensional del nivel ejecutivo, quedaron vigentes tratándose de suboficiales el Decreto 1212 de 1990 y de Agentes el Decreto 1213 de 1990.**

*Se aclara que el estudio se centrará sólo en el régimen de asignación de retiro vigente cuando entró a regir la Ley 923 de 2004, para los grados de Suboficial y agente, teniendo en cuenta que de conformidad con la Ley 180 de 1995 que creó el Nivel ejecutivo, a él únicamente podían acceder quienes tuvieran dicha calidad y aunque también estableció que personal no uniformado y otros por incorporación directa podían hacerlo, lo cierto es que la demanda se refiere a la desmejora en materia de asignación de retiro del personal de suboficiales y agentes.*

*Aclarado lo anterior, se tiene que el Decreto 1212 de 1990, en el artículo 144, en relación con los suboficiales contemplaba la posibilidad de retiro a los 15 años de servicio en los siguientes eventos:*

*...por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente...*

*Igualmente contempló el derecho para quienes se retiraran (voluntad propia) o fueran separados, a los 20 años, de acceder a una asignación de retiro.*

*En los dos casos (15 o 20 años), dispuso lo siguiente:*

*...tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.*

*En lo que tiene que ver con los agentes de la Policía Nacional, el Decreto 1213 de 1990, artículo 104, contempló la posibilidad de acceder a una asignación de retiro después de 15 años, al retiro por las siguientes causales:*

*...por disposición de la Dirección General, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente a su categoría, o por mala conducta comprobada, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por inasistencia al servicio y los que se retiren a solicitud propia después de los veinte (20) años de servicio.*

*Y con 20 años, por solicitud propia, evento en el cual se contempló una asignación de retiro en las siguientes condiciones:*

*...se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 100 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda de los quince (15) sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.*

*Por su parte el Parágrafo acusado del artículo 25, dispuso:*

*Asignación de retiro con 20 años por llamamiento a calificar servicios por voluntad del Ministro de Defensa Nacional o del Director General de la Policía Nacional y por disminución de la capacidad psicofísica.*

*Asignación de retiro a los 25 años por solicitud propia y retiro absoluto del servicio.*

*En las anteriores condiciones, se observa que la disposición acusada, es contraria a las previsiones del inciso segundo del numeral 3.1. del artículo 3º de la Ley 923 de 2004, según el cual:*

*...A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.*

*E igualmente desconoció la obligación contenida en el mismo artículo 3º numeral 3.9, según el cual debía establecer un régimen de transición que reconociera las expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a acceder al derecho de pensión o asignación de retiro y al no establecerlo desconoció igualmente la disposición que se acaba de transcribir.*

*Sobre éste punto, se acoge lo expresado en sentencia de esta sección, proferida el 14 de febrero de 2007, expediente No. 1240 de 2004, que en lo que tiene que ver con el régimen de transición, expresó:*

*“Al regularse nuevas disposiciones en materia prestacional, sin entrar a diferenciar entre quienes ingresaron al nivel ejecutivo desde el momento de su creación respecto de los que se vincularon con posterioridad y de quienes permanecieron como suboficiales o agentes en la institución policial, esto es, sin consagrarse un régimen de transición, se estarían desconociendo, así mismo, unos postulados constitucionales (Artículos. 13, 48 y 53) y legales (Artículo 7º parágrafo de la Ley 180 de 1995), que amparan y protegen de manera especiales los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, los que, de no tenerse en cuenta, violarían el principio de la buena fe y de la confianza legítima.*

*En consecuencia, la norma acusada, parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, excedió lo dispuesto por la Ley marco e invadió competencias legislativas, pues modificó lo referente al tiempo mínimo para obtener la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo que a la fecha de entrada en vigencia de la norma se encontraban en servicio activo al no establecer un régimen de transición que respetara sus expectativas legítimas.*

*En efecto, estableció como tiempo mínimo para obtener la asignación de retiro por solicitud propia en 25 años, tiempo que excede al contemplado en el régimen anterior para suboficiales en 5 años.*

*Y tratándose de causales diferentes al retiro por solicitud propia, lo estableció en 20 y 25 años, cuando las normas anteriores habían establecido entre 15 y 20 años, tiempo de servicio que debía respetarse para quienes, de conformidad con lo ordenado en la Ley 923 de 2004, se encontraban en servicio activo al momento de la entrada en vigencia de la Ley, como esta mínima lo dispuso.*

*Es cierto que la Ley marco establece en su artículo 3º, numeral 3.1 un tiempo mínimo de servicio de 18 años y un límite máximo de 25 años para obtener dicha asignación, sin embargo, en el presente asunto no se trata de establecer si el requisito de tiempo de servicio para la generalidad de los beneficiarios se estableció dentro de ese límite mínimo y máximo, sino de la garantía que la Ley 923 de 2004 estableció a favor del personal en servicio activo vinculado a la Policía Nacional y concretamente del personal perteneciente al nivel ejecutivo, que es la inconformidad planteada en la demanda.*

*En consecuencia, se declarará la nulidad del Parágrafo acusado, en consideración a que desconoce las previsiones contenidas en la Ley 923 de 2004, que debió servirle de marco, careciendo en consecuencia de efecto, como lo señala el artículo 5º ibídem.*

*Por lo expuesto el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,*

**FALLA:**

**ESTÉSE** a lo resuelto en la sentencia 14 de febrero de 2007, proferida en el expediente 1240-2007, por medio de la cual declaró la nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995.

**DECLÁRESE** la nulidad del Parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 del 2004, expedido por el Gobierno Nacional, por medio del cual fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros del personal del nivel ejecutivo de la policía Nacional, en desarrollo de lo dispuesto por la Ley 923 de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

*(...)"*

Al declararse la nulidad del Artículo 25 Parágrafo 2º del Decreto 4433 de 2004, quedó nuevamente en un limbo jurídico lo referente al reconocimiento de la asignación de retiro de aquellos policiales vinculados a la Policía Nacional en la carrera del Nivel Ejecutivo antes del 31 de diciembre de 2004, caso que es el del señor **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**, por lo tanto, reitero, en aplicación del derecho de igualdad y principios de favorabilidad en materia laboral y analogía la



norma a aplicar para los miembros del Nivel Ejecutivo es el Decreto 1212 de 1990 en su artículo 144.

Nuevamente, para solucionar el vacío jurídico en materia de asignación de retiro para los miembros del Nivel Ejecutivo, el Gobierno Nacional recurre a la misma táctica ilegal aludida anteriormente, cual es la de redimir actos administrativos declarados nulos por el honorable Consejo de Estado, y para ello amparado en las facultades otorgadas en la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004, creó un nuevo Decreto Ley para regular lo referente a la asignación de retiro de los Integrantes del Nivel Ejecutivo vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, siendo este el Decreto Ley 1858 del 06 de septiembre de 2012, pero de manera inexplicable incurre nuevamente en los mismos vicios de nulidad que afectaron la norma anterior, es decir, el Decreto Ley 4433 de 2004, pues no se tuvo en cuenta que existían policiales vinculados al Nivel Ejecutivo por incorporación directa desde hacía varios años (antes del 31 de diciembre de 2004), y que estos institucionales ya contaban con más de quince años al servicio de la Policía Nacional o estaban ad portas de cumplir dicho tiempo (caso que es el del señor MENA NEIZA), omitiendo crear un régimen de transición y desconociendo los derechos de aquellos uniformados que se encontraban vinculados con la institución antes de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, circunstancias que dieron lugar a que el acto administrativo fuera demandado, tramitándose actualmente varias demandas ante el honorable Consejo de Estado.

En este orden de ideas, para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro, la norma que se le debe aplicar al señor Intendente retirado **JOSÉ HORACIO MENA NEIZA**, es el Decreto 1212 de 1990, norma que para efectos del reconocimiento del derecho aludido, exige que el servidor público sea retirado del servicio activo después de quince (15) años, cuando el retiro se produzca por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, precepto que aplica para el señor MENA, quien laboró por un lapso de Veintiún (21) años, Dos (02) meses y Cuatro (04) días al servicio de la Policía Nacional, siendo retirado por DESTITUCIÓN (Mala conducta).

De conformidad con lo expuesto en el presente memorial, con el acto administrativo cuya nulidad se solicita, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional incurrió en un desconocimiento del ordenamiento superior, así como del precedente jurisprudencial; e incurrió igualmente en una violación al derecho fundamental del debido proceso del señor JOSÉ HORACIO MENA NEIZA, **POR LO TANTO AQUELLOS ARTÍCULOS DEL DECRETO 4433 DE 2004 Y DEL DECRETO 1858 DEL 2012, QUE DESCONOCIERON EL MANDATO SUPERIOR DEBEN INAPLICARSE EN ACATAMIENTO DE LA EXCEPCIÓN DE ILEGALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD**, contenida en el artículo 4 de nuestra Carta Magna y que al respecto expone:

ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

Son estas entonces, las razones por las que el acto administrativo acusado, debe ser declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

## CAPÍTULO VI. **PROCEDIMIENTO:**

El proceso habrá de seguirse por el procedimiento ordinario, indicado en la Ley 1437 de 2011.

## CAPÍTULO VII. **CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD:**

En virtud de que lo pretendido a través de la presente demanda es una pensión, se omite el requisito de procedibilidad por tratarse de un derecho no susceptible de conciliación.

## CAPÍTULO VIII. **PRUEBAS:**

### **DOCUMENTALES ADJUNTAS A LA DEMANDA:**

Allego como tales las siguientes:

1. Poder a mi favor.
2. Original del acto administrativo cuya nulidad se solicita.
3. Copia simple del poder y derecho de petición mediante el cual se solicitó la asignación de retiro del señor JOSÉ HORACIO MENA NEIZA.
4. Copia simple del poder y derecho de petición mediante el cual se solicitó la hoja de servicios del señor JOSÉ HORACIO MENA NEIZA.
5. Oficio mediante el cual se atendió derecho de petición mediante el cual se solicitó la copia de la hoja de servicios del señor MENA NEIZA.
6. Copia simple de la Resolución número 02862 del 21 de junio de 2017, mediante la cual se retiró del servicio al señor Intendente JOSÉ HORACIO MENA NEIZA; y copia simple de la notificación personal de la referida Resolución.

7. Extracto de hoja de vida del señor Intendente JOSÉ HORACIO MENA NEIZA.
8. Certificación expedida por el Jefe de Talento Humano del Departamento de Policía Valle, donde se hace constar las dependencias donde laboró el señor Intendente JOSÉ HORACIO MENA NEIZA, siendo la última, la Subestación de Policía La Mesa del Municipio de Ginebra (Valle).
9. Certificación de sueldo devengado para el mes de junio de 2017 por el señor IT JOSÉ HORACIO MENA NEIZA.

### **DOCUMENTALES A SOLICITAR:**

Solicito al honorable Juez del Circuito Administrativo, se oficie a la Dirección General de la Policía Nacional ubicada en la Transversal 45. Nro.40-11 CAN Bogotá D.C, para que se allegue al proceso fotocopia auténtica de los siguientes documentos:

1. Copia auténtica del acta de Posesión y Resolución de nombramiento como miembro de la Policía Nacional del señor JOSÉ HORACIO MENA NEIZA.
2. Copia auténtica de la Resolución mediante la cual se retiró del servicio activo al señor JOSÉ HORACIO MENA NEIZA, así como de su notificación.
3. Hoja de servicios del señor Intendente retirado JOSÉ HORACIO MENA NEIZA.
4. Certificación del último sueldo devengado por el señor JOSÉ HORACIO MENA NEIZA.

### **CAPÍTULO IX. COMPETENCIA Y CUANTÍA:**

Es competente el Juez Administrativo del Circuito de Cali Valle del Cauca para conocer de este proceso en primera instancia, por el último lugar donde prestó sus servicios el señor JOSÉ HORACIO MENA NEIZA (Subestación de Policía La Mesa, Municipio de Ginebra - Valle), la naturaleza de la acción, y por la cuantía que se deriva de la misma y que asciende al momento de presentación de la demanda a la suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS (\$10'252.020.00), de acuerdo con la siguiente estimación razonada:

De conformidad con lo dispuesto en el Decretos 1212 de 1990 y 1791 de 2000, a un Suboficial con 21 años de servicio se le debe reconocer y pagar una asignación mensual de retiro equivalente al 74% del sueldo básico recibido en actividad, así

como la totalidad del subsidio familiar, el 20% de la prima de actividad y una duodécima parte de la prima de navidad. En éste orden de ideas, si tenemos en cuenta que según lo expuesto en el acto administrativo acusado, para la fecha de retiro del señor Intendente JOSÉ HORACIO MENA NEIZA (27 de junio de 2017), contaba con 21 años 02 meses y 04 días de servicio; y según certificación expedida por el Tesorero General de la Policía Nacional, recibía por concepto de salario básico, la suma de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$2'159.634.00), suma que acrecida con el 20% de la prima de actividad (\$431.926.00), la duodécima parte de la prima vacacional (\$179.969.00) y el subsidio familiar (\$55.834.00) nos da un valor total de (\$2'827.363.00), valor al cual se le sacara el 74% que será la asignación mensual de retiro a pagar al señor Intendente retirado JOSÉ HORACIO MENA NEIZA, lo cual equivale a la suma de (\$2'092.248.00); y si tenemos en cuenta la fecha en que se hizo exigible la asignación (27 de junio de 2017), y la fecha de presentación de la demanda (noviembre 21 de 2017), encontramos que han transcurrido (147) días, lo que permite concluir que el valor de lo dejado de percibir por concepto de mesadas equivale a la suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS (\$10'252.020.00), suma que constituye el valor estimado de la cuantía.

## CAPÍTULO X.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES:

Invoco como normas de derecho las siguientes:

1 Constitución Nacional en sus Artículos 2, 4, 5, 13, 25, 48, 53 Inciso 2º, 58, 150-19 y 19E, 218, 230 Y 241.

Ley 1437 de 2011. Ley 4ª de 1992, en su artículo 2º.

Ley 180 del 13 de enero de 1.995, en el artículo 7º, Numeral 5º, Parágrafo.

Decreto Ley número 132 de enero 13 de 1.995, en su Artículo 82.

Ley 923 de 2.004 en su Artículo 2º Numeral 2.1 y 2.8; Artículo 3º, Numerales 3.1 y 3.9; así como el Artículo 5º de la Norma Ibídem.

Decreto Ley 1212 de 1990, en su Artículo 144.

Sentencia de fecha 14 de febrero de 2007, emitida por el honorable Consejo de Estado, con ponencia del doctor ALBERTO ARANGO MANTILLA, emitida dentro del radicado 11001-03-25-000-2004-00109-01(1240-04).

**CAPÍTULO XI.**  
**MEDIO DE CONTROL:**

El medio de control es el de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

**CAPÍTULO XII.**  
**PARTES REPRESENTANTES Y NOTIFICACIONES:**

1º. – La parte demandante, está constituida por el señor JOSÉ HORACIO MENA NEIZA, quien recibe notificaciones en la Carrera 4. Nro. 9 – 17, oficina 210 del Edificio Marchant en Cali Valle, Tel. 881070.

2º. El Apoderado Judicial de la parte demandante BENJAMIN ACOSTA ORTIZ en la Carrera 4ª. No.9 -17 Of. 210 Edif. Marchant, Cali (Valle) Tel. 8881070, Celular 318-2095959 de la ciudad de Cali.

3º. La Entidad Demandada. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, representada por el señor Brigadier General ® JORGE ALIRIO BARÓN LEGUIZAMÓN o por delegado o quién haga sus veces, quién recibe notificaciones en la Carrera 7ª Nro. 12B – 58 en la ciudad de Bogotá D.C.

**NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS:**

La entidad demandada (Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional) se puede notificar en el correo electrónico **judiciales@casur.gov.co**

El demandante en el correo electrónico **benjaminacostaortiz@hotmail.com**.

**CAPÍTULO XIII.**  
**ANEXOS:**

Acompaño poder, copia de la demanda y de sus anexos para dar traslado a la parte demandada, al Representante del Ministerio Público, a la Agencia Nacional

*BENJAMÍN ACOSTA ORTIZ*  
*Abogado*  
*Cra. 4. Nro. 9-17 Of. 210 Edificio Marchant, Cali (Valle), Tel. 8881070. Cel. 311-3341511*

de Defensa Jurídica del Estado; y copia sencilla de la demanda para el archivo del juzgado; así mismo anexo CD con copia de la demanda en PDF.

Del señor Juez,

Atentamente,

**BENJAMIN ACOSTA ORTIZ.**  
C. C. Nro. 6`513.396 De Trujillo (Valle).  
T. P. Nro. 107.090 Del C. S de la J.